

**Comunidad
de Madrid**CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN**NÚMERO 1496/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:**Expte.: AM-003/2026**

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del **“ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y GRAVES TRASTORNOS DE CONDUCTA ASOCIADOS”**, a propuesta de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, cuya adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, justificando la necesidad en los siguientes motivos:

Dentro de la población de personas con discapacidad intelectual existe un porcentaje que precisa de apoyos específicos por presentar graves alteraciones de conducta. “Hablamos de aquellas conductas que, debido a su alta frecuencia, duración o intensidad, y a su impacto sobre la persona y la sociedad, generan una limitación significativa en su participación social, o ponen en riesgo su integridad física o la de los demás” (Emerson, 1995).

Las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta precisan de una intervención especializada, diferenciada y ajustada ya que la interacción de éstas con su entorno suele plantear graves dificultades personales y de inclusión social y familiar y generar grandes niveles de dependencia.

Se entiende por residencia para personas adultas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados el equipamiento social especializado que ofrece alojamiento, manutención, habilitación, cuidado y apoyo personal y social en el grado que sea necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y atención especializada que incluye actividades rehabilitadoras y de fomento del ocio y la normal convivencia a fin de evitar la progresión de situaciones de deterioro y promover el mantenimiento y desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social.

Con el objetivo de articular unas condiciones homogéneas que garanticen la continuidad de los contratos, e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos propios, se considera oportuno y necesario aprovechar las ventajas que supone la fórmula del Acuerdo Marco establecida en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Con este nuevo Acuerdo Marco se intentará asegurar un impulso cualitativo a través del incremento de plazas hasta llegar a un total de 950, revisando asimismo los criterios de calidad asistencial en consonancia con las directrices de la Ley 9/2017 y las Directivas europeas, para garantizar como mínimo, el mantenimiento de todas las plazas de esta tipología actualmente concertadas, asegurando la continuidad en la atención a los usuarios de este servicio público.

Fecha

Madrid, a fecha de firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)**EL VICECONSEJERO**Firmado digitalmente por: GOMEZ-TAVIRA GOMEZ-TAVIRA PABLO
Fecha: 2025.05.29 10:59